Masterhacks – Luego de las primeras declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, acerca del problema sobre supuesto espionaje por parte del gobierno a periodistas y activistas, organizaciones civiles afirmaron que el presidente condenó al fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenazó a quienes denunciaron ser víctimas.

En un comunicado conjunto por parte de el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la Competitividad, se refirieron a las expresiones del presidente que realizó en Jalisco, como «impropias de su investidura y en extremo preocupantes».

Dichas organizaciones afirman que sin esperar que la investigación haya comenzado, Peña «condenó al fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad».

Además, informan que como la investigación no comienza aún, el presidente «carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas, y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección».

“Que el mandatario descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”, agregan las organizaciones.

Por otro lado, acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado el espionaje.

Destacan que las afirmaciones del presidente son “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de

la información".

En un tercer argumento, las organizaciones afirman que el mandatario mexicano realizó «una afirmación en extremo grave», al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje.

"Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del presidente interesa a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el titular ejecutivo acepta su vulnerabilidad confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación".

Como cuarto argumento de las organizaciones, se tiene la «muy preocupante» amenaza a las personas denunciantes de espionaje. "Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos".

Afirman que cuando el presidente de un país pide que se aplique todo el peso de la ley a las personas que acuden a instituciones a denunciar delitos que resienten, "se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas".

"Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global", agregaron.

"Al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo".

Ante esto, aseguran que la única forma de asegurar una investigación «profunda y real», es

con la integración de un «panel independiente de expertos» que realicen los trabajos necesarios «de la acción o inacción» de la PGR en la investigación del espionaje.

Ademas, piden que se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje, debido a que el mismo mandatario aceptó que su gobierno tiene tecnología de espionaje.